

SESIONES

DE LA

DIPUTACION PERMANENTE DE CORTES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. DIEGO MARTINEZ BARRIO

Sesión del martes 2 de Noviembre de 1937

SUMARIO

Abierta la sesión a las doce y quince minutos, se leyó el acta de la sesión anterior.—El Sr. Corominas hace una aclaración.—Manifestación del señor Presidente.—Queda aprobada el acta con la aclaración hecha por el Sr. Corominas.

Sustitución del Sr. Uribe por el Sr. Montiel como representante de la minoría parlamentaria comunista en la Diputación Permanente.—Comunicación.—Manifestación del Sr. Presidente.

Designación, por el grupo parlamentario de Unión Republicana, de D. Eduardo Frápolli, para sustituir a D. Maximiliano Martínez Moreno, vocal jurado, en calidad de propietario, del Tribunal popular de Responsabilidades civiles.—Comunicación.—Manifestación del Sr. Presidente.

Suplicatorio del juez especial número 3, de Valencia, designado para instruir el sumario contra el Diputado a Cortes D. Luis Lucía Lucía.—Comunicación de Justicia, trasladando otra del Tribunal Supremo.—Manifestación del Sr. Presidente.

Suplicatorio del Juzgado especial, que entiende en la causa instruida por la pérdida de Málaga, para procesar al Diputado a Cortes D. Cayetano Bolívar Escribano.—Comunicación.—Manifestación del Sr. Presidente.

Petición de un anticipo reintegrable de 30.000 pesetas al Tribunal de Cuentas para gastos de su traslado a Barcelona e instalación de sus servicios

en aquella capital.—Comunicación.—Propuesta del Sr. Presidente.—Abierta discusión, se aprueba sin ninguna la concesión del anticipo.

Escrito del Diputado Sr. Llopis denunciando el atropello del que se decía víctima el Sr. Largo Caballero cuando iba camino de Alicante.—Manifestación del Sr. Presidente.—Lectura de documentos.

Abrese discusión acerca del hecho en sí y de la conducta del Sr. Presidente en el asunto.—Manifestaciones del Sr. Velao.—El Sr. Presidente propone la toma en consideración de que sea discutida la protesta del Sr. Largo Caballero.—Así se acuerda.—Abierto debate intervienen los señores Velao, Araquistáin, Lamonedá, Ibárruri, Pascual Leone, Jáuregui y Corominas.—Propuesta del señor Presidente, considerando liquidado el incidente y aprobando la conducta seguida por la Presidencia de la Cámara.—Queda aprobada.—Nueva manifestación del Sr. Presidente respecto de la distinción que debiera establecerse entre el derecho del Parlamento a designar una Comisión de su seno y el individual de los Sres. Diputados para visitar los frentes.—Intervención del señor Santaló.—Manifestación del Sr. Presidente.—Se aprueba la propuesta.

El Sr. Vargas excusa la asistencia del Sr. Palomo, que se adhiere a los acuerdos de la mayoría.—Manifestación del Sr. Presidente.

Se levanta la sesión a la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

Abierta la sesión a las doce y quince minutos, en segunda convocatoria, con asistencia de los señores Santaló, Corominas, Pascual Leone, Ferregui, Prat, Agustí, Tejero, Araquistáin, Alvarez del Vayo, Vargas, Montiel y Torres Campaña, y leído el acta de la anterior, dijo

El Sr. **COROMINAS**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **COROMINAS**: Simplemente para hacer una aclaración. De la lectura del acta parece desprenderse que yo dijera en la sesión anterior que no puede procesarse a ningún Sr. Diputado por desafección al régimen, cuando, en realidad, a lo

que yo me referí fué a la desafección, pero manifestada por actos.

El Sr. **PRESIDENTE**: ¿Se aprueba el acta con la aclaración solicitada por el Sr. Corominas? (**Asentimiento**.) Queda aprobada."

Leída una comunicación de la minoría parlamentaria comunista designando al Diputado don Francisco Félix Montiel para sustituir al Sr. Uribe en la Diputación Permanente de las Cortes, dijo

El Sr. **PRESIDENTE**: Enterado y surtirá los efectos correspondientes."

Dada cuenta, a continuación, de una comunicación del grupo parlamentario de Unión Republicana, en la que manifiesta haber designado al Diputado D. Eduardo Frápolli para sustituir a don Maximiliano Martínez Moreno, vocal jurado, en calidad de propietario, del Tribunal popular de Responsabilidades civiles, dijo

El Sr. **PRESIDENTE**: Se hará constar a los efectos oportunos y se comunicará al Tribunal de Responsabilidades civiles el nuevo nombramiento."

Leída una comunicación del Ministerio de Justicia trasladando otra que el excelentísimo señor presidente del Tribunal Supremo dirige juntamente con el suplicatorio del juez especial número 3, de Valencia, designado para instruir el sumario contra el Diputado a Cortes D. Luis Lucia y Lucia, dijo

El Sr. **PRESIDENTE**: De acuerdo con lo preceptuado por el Reglamento, pasarán esta comunicación y el suplicatorio que le acompaña a la Comisión correspondiente."

Leída asimismo una comunicación del Ministerio de Justicia dando cuenta de la petición de suplicatorio elevada a dicho Departamento ministerial por el juez especial que entiende en la causa instruida por la pérdida de Málaga para procesar al Diputado a Cortes D. Cayetano Bolívar Escribano, dijo

El Sr. **PRESIDENTE**: Como en el caso de que anteriormente hemos tratado, se pasarán a la Comisión de suplicatorios el deducido para procesar al Diputado Sr. Bolívar Escribano."

Leída seguidamente otra comunicación de la Comisión permanente del Tribunal de Cuentas en la que se traslada el acuerdo por ella adoptado con relación a solicitar de la Diputación Permanente la concesión al mencionado Tribunal de la cantidad de 30.000 pesetas, pedida en tanto se tramita el expediente de otorgamiento de crédito extraordinario para atender a la instalación de los servicios en Barcelona, dijo

El Sr. **PRESIDENTE**: A consecuencia del acuerdo del Gobierno de trasladar todos los servicios del Estado a la ciudad de Barcelona, el Tribunal de Cuentas empezó a realizar gestiones para efectuar, asimismo, su traslado. Carece el Tribunal de Cuentas en su presupuesto de toda partida con la que atender a los gastos que un traslado de esta naturaleza origina, y hubo de dirigirse a la Comisión permanente del Tribunal de Cuentas del Parlamento en solicitud de que, mientras instruye y termina un expediente de crédito extraordinario, se le concediera la cantidad de 30.000 pesetas a título de anticipo reintegrable. La Comisión especial del Tribunal de Cuentas del Parla-

mento ha informado favorablemente esta solicitud del Tribunal, pero, no considerándose con facultades para resolver, lo pasa a la Diputación Permanente para que ella tome el acuerdo que estime oportuno.

Se abre discusión. ¿Desea algún Sr. Diputado hacer uso de la palabra respecto de este asunto? (**Pausa**.) ¿Se aprueba la concesión, a título de anticipo reintegrable, de esas 30.000 pesetas al Tribunal de Cuentas? (**Asentimiento**.) Queda aprobado.

El Sr. **PRESIDENTE**: El pasado día 23 de Octubre, en ocasión de no encontrarme en esta ciudad, hubo de personarse en el edificio del Congreso el Diputado Sr. Llopis para denunciar un atropello del que se decía víctima nuestro compañero de Diputación Sr. Largo Caballero. Puesto al habla, telefónicamente, con el Sr. Llopis, le indiqué la necesidad de que formulara por escrito la denuncia de ese supuesto atropello, e inmediatamente que ese escrito estuviera redactado y presentado a la Mesa de las Cortes proveería. Hízolo así el Sr. Llopis, y yo hube de dar traslado de dicha protesta al Sr. Ministro de la Gobernación y éste contestóme en los términos que la Diputación Permanente va a conocer seguidamente.

Más que hacer yo una relación de todo lo ocurrido, prefiero que la Diputación Permanente conozca del escrito originario de protesta, del que hube de dirigir al Sr. Ministro de la Gobernación y de la contestación de éste; de un nuevo escrito presentado por el Sr. Largo Caballero a la Presidencia de las Cortes y de una última comunicación de Sr. Ministro de la Gobernación.

Conocidos que sean por la Diputación Permanente todos estos antecedentes, se abrirá debate respecto a dos extremos: primero, si se toma en consideración la protesta presentada por el señor Largo Caballero, y después, si se aprueba la conducta seguida por el Presidente de la Cámara en la tramitación del asunto."

DOCUMENTOS A QUE SE HA REFERIDO EL SEÑOR PRESIDENTE

Documento número 1.

"Excmo. Sr. Presidente de las Cortes.—Excelentísimo Sr.: Tengo el sentimiento de comunicar a V. E. que esta mañana, a la salida de Valencia, en la carretera que conduce a Sueca, por El Saler, ha sido detenido por la Policía el coche que ocupaba el Excmo. Sr. D. Francisco Largo Caballero, Diputado a Cortes, a quien acompañaba el Diputado Sr. Carrillo y el Diputado que suscribe. El agente comunicó al Sr. Largo Caballero la orden que tenía del director general de Seguridad, a virtud de la cual se le prohibía que continuase viaje y se le ordenaba que regresase a Valencia. El Sr. Largo Caballero, después de acreditar su calidad de Diputado a Cortes, preguntó al agente si tenía orden escrita de sus jefes, a lo que contestó negativamente. El Sr. Largo Caballero intentó continuar viaje, y como los agentes de la Autoridad se oponían abandonó el coche prosiguiendo a pie hasta el pueblo más próximo, que

esta solici-
dose con fa-
Diputación
acuerdo que

Sr. Diputa-
e este asun-
ción, a título
000 pesetas
nto.) Queda

día 23 de
me en esta
cio del Con-
enunciar un
stro compa-
o. Puesto al
s, le indicó
crito la de-
mediatamen-
presentado
fzolo así el
e dicha pro-
y éste con-
tación Per-

odo lo ocu-
nante co-
ta, del que
obernación
evo escrito
o a la Pre-
comunica-

n.
ación Per-
abrirá de-
si se toma
por el se-
aprueba la
la Cámara

ERIDO EL

es.—Exce-
comunicar
Valencia
r El Saler
que ocu-
Caballero
a el Dipu-
scribe. El
o la orden
uridad, a
continuase

Valencia
reditar su
al agente
que con-
allero in-
tes de la
he prosi-
cimo, que

es el de Perelló. En dicho pueblo se presentó un comisario de Policía, que entregó al Sr. Largo Caballero una orden que, copiada literalmente, dice así:

“Dirección general de Seguridad.

Por conveniencia del momento queda prohibida la salida de la jurisdicción de la capital de Valencia al Excmo. Sr. D. Francisco Largo Caballero, por lo que encargo a los agentes dependientes de mi Autoridad que, con toda la consideración y respeto debido a su alta personalidad, le comuniquen esta resolución.

Valencia, 23 de Octubre de 1937.

El director general, C. de Juan. (Rubricado.)

Señor comisario jefe de la Brigada de Investigación criminal.”

Semejante atropello obliga al Diputado que suscribe a regresar a Valencia para comparecer en el Congreso y formular la más enérgica protesta, como lo hace, por la orden de confinamiento decretada contra un Sr. Diputado, y acudir ante V. E. para que, como Presidente de las Cortes, ampare y defienda con toda rapidez y energía los derechos inalienables de los Sres. Diputados.

Viva V. E. muchos años. Valencia, 23 de Octubre de 1937.—Rodolfo Llopis. (Rubricado.)”

Documento número 2.

“Excmo. Sr.: Con esta fecha recibo una comunicación suscrita por el Diputado a Cortes D. Rodolfo Llopis, que dice así: “Excmo. Sr. Presidente de las Cortes.—Excmo. Sr.: Tengo el sentimiento de comunicar a V. E. que esta mañana, a la salida de Valencia, en la carretera que conduce a Sueca, por El Saler, ha sido detenido por la Policía el coche que ocupaba el Excmo. Sr. D. Francisco Largo Caballero, Diputado a Cortes, a quien acompañaba el Diputado Sr. Carrillo y el Diputado que suscribe. El agente comunicó al Sr. Largo Caballero la orden que tenía del director general de Seguridad, a virtud de la cual se le prohibía que continuase viaje y se le ordenaba que regresase a Valencia.

El Sr. Largo Caballero, después de acreditar su calidad de Diputado a Cortes, preguntó al agente si tenía orden escrita de sus jefes, a lo que contestó negativamente. El Sr. Largo Caballero intentó continuar viaje, y como los agentes de la Autoridad se oponían, abandonó el coche prosiguiendo a pie hasta el pueblo más próximo, que es el de Perelló. En dicho pueblo se presentó un comisario de Policía, que entregó al Sr. Largo Caballero una orden que, copiada literalmente, dice así:

“Dirección general de Seguridad.

Por conveniencia del momento queda prohibida la salida de la jurisdicción de la capital de Valencia al Excmo. Sr. D. Francisco Largo Caballero, por lo que encargo a los agentes dependientes de mi Autoridad que, con toda la consideración y respeto debido a su alta personalidad, le comuniquen esta resolución.

Valencia, 23 de Octubre de 1937.

El director general, C. de Juan. (Rubricado.)

Señor comisario jefe de la Brigada de Investigación criminal.”

Semejante atropello obliga al Diputado que suscribe a regresar a Valencia para comparecer en el Congreso y formular la más enérgica protesta, como lo hace, por la orden de confinamiento decretada contra un Sr. Diputado, y acudir ante V. E. para que, como Presidente de las Cortes, ampare y defienda con toda rapidez y energía los derechos inalienables de los Sres. Diputados.

Viva V. E. muchos años. Valencia, 23 de Octubre de 1937.—Firmado, Rodolfo Llopis.”

Al dar traslado a V. E. del anterior escrito ruégole encarecidamente tenga a bien disponer lo necesario para que se den al Sr. Diputado don Francisco Largo Caballero las facilidades necesarias para el libre ejercicio—dentro del marco de las leyes—de los derechos constitucionales que corresponde a las funciones de su investidura parlamentaria.

Valencia, 23 de Octubre de 1937.—Diego Martínez Barrio.

Nota.—El que suscribe, oficial mayor interino del Congreso de los Diputados, hace constar, a los efectos de validez en el presente oficio, que la firma del Excmo. Sr. Presidente del Congreso don Diego Martínez Barrio, que por éste le ha sido ordenado telegráficamente estamparla en la forma que aparece.

Señor Ministro de la Gobernación.”

Documento número 3.

Hay un sello en seco que dice: “Ministerio de la Gobernación”.

“Excmo. Sr.: En respuesta a su comunicación del 23 del corriente, trasladándome el escrito producido por el Diputado D. Rodolfo Llopis y rogándome disponga lo necesario para que se le den al Sr. Diputado D. Francisco Largo Caballero las facilidades necesarias para el libre ejercicio—dentro del marco de las leyes—de los derechos constitucionales que corresponden a las funciones de su investidura parlamentaria, me obligo a decirle, para su conocimiento y demás efectos, que la orden que prohibió a D. Francisco Largo Caballero trasladarse a Alicante el pasado sábado, día 23 del corriente, está absoluta y totalmente justificada, por suponer tal viaje un propósito premeditado de rebeldía contra una disposición gubernativa, la suspensión de los actos públicos, justificada por los desgraciados sucesos militares de Asturias. La prohibición de celebrar reuniones públicas afectó a los partidos del Frente Popular, que tenían organizados tres mítines en Madrid, en Barcelona y en Valencia; al Comité de enlace U. G. T.-C. N. T., que había anunciado otro en Valencia, y el excelentísimo señor don Francisco Largo Caballero, que anunció una conferencia en Alicante. Los organizadores de los cuatro primeros mítines acataron lo dispuesto. No así las organizaciones que patrocinaban la conferencia del Sr. Largo Caballero en Alicante, quienes sirviéndose de su periódico local “Avance” y sin presentar la noticia a la censura, hicieron publicar a toda plana y con grandes ti-

tuales la siguiente convocatoria: "Largo Caballero llegará a Alicante mañana, a las seis de la tarde. Visitará primeramente los locales de la U. G. T., sitos en el antiguo Casino. Camaradas, todos a saludar al secretario auténtico de nuestra gloriosa sindical. El Gobierno ha suspendido los actos públicos, entre ellos, como es natural (estas tres palabras en gruesos caracteres), el de Alicante. Largo Caballero, sin embargo, saludará a los trabajadores alicantinos mañana, sábado, y el domingo visitará Elda, Elche y otros pueblos de la provincia. Hoy más que nunca, ¡viva la U. G. T.!"

Suspendidos los actos públicos, era natural que la autoridad no aceptase, sin caer en desprestigio, un desafío de tal naturaleza, y a fin de evitar toda enojosa complicación, contando con el alto sentido de responsabilidad del Sr. Largo Caballero, quien por haber ejercido, entre otros cargos de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros, debíamos suponerle propicio a una rectificación prudente, se le exhortó telefónicamente por el director general de Seguridad a desistir de su viaje a Alicante. La respetuosa invitación no surtió efecto ninguno. El Sr. Largo Caballero rechazó todo razonamiento, encastillándose en su propósito de ir a Alicante a saludar a "unos amigos". Fracasada, con sorpresa para todos, la invitación a la responsabilidad, no quedaba, en nombre del prestigio del Poder público y de la conveniencia nacional, otro camino que el de impedir que el Sr. Largo Caballero realizase su preparado y anunciado viaje a Alicante, evitando que en el intento de desacatar órdenes terminantes del Gobierno se produjesen lamentables desórdenes al pretender la fuerza pública impedir una manifestación no autorizada.

Los agentes encargados de comunicar al señor Largo Caballero la decisión de mi autoridad se comportaron en todo momento con la cortesía y deferencia debidas a un miembro del Parlamento, no importa haberse hecho la fácil reflexión de que carece de todo derecho para exigir respetos quien, con olvido de su significación, se obstina en no observar las decisiones del Gobierno ni aun cuando, como en el caso que nos ocupa, se fundan en auténticos motivos de dolor y conveniencia nacional.

Compruebe, Sr. Presidente, estas razones con las del escrito a que contesta, y vea si entre los derechos inalienables de los Sres. Diputados, que D. Rodolfo Llopis me pide defienda con toda rapidez y energía, figura el de desacatar las órdenes que emanan del Gobierno. Si tal derecho existiera, y yo parlamentario no lo conozco, júzgueme como reo convicto y confeso de atropello al fuero parlamentario. En caso contrario, corresponde a su autoridad, como Presidente del Parlamento, recordar a los Sres. Diputados su inexcusable obligación de obediencia a las órdenes que emanen del Poder ejecutivo.

Valencia, 25 de Octubre de 1937.—Julían Zugazagoitia.—Sr. Presidente del Congreso de los Diputados."

Documento número 4.

"Excmo. Sr.: En la mañana del pasado sábado, 23 de Octubre, fui objeto de un atropello que tengo el deber de comunicar a V. E., como Presidente de las Cortes, porque el ultraje a mi persona, no sólo afecta a un ciudadano español, sino a un Diputado de la Nación y, como tal, de rechazo, ofende y humilla a todos los Diputados leales que, por precepto constitucional, no pueden ser detenidos, salvo flagrante delito.

Antes de enjuiciar el hecho insólito y claramente delictivo, casi sin precedentes ni en los tiempos ominosos de la monarquía, haré un relato breve y objetivo del suceso, para que V. E. de inmediato, y las Cortes de su digna presidencia en su día, se den precisa cuenta del escarnio que en mi persona se ha inferido a todos los Diputados de la España leal.

A eso de las diez y media de la mañana del mencionado día, el coche que me conducía por la carretera llamada del Saler fué detenido por un control del puesto del Perellonet, notificándome el agente del mismo que tenía orden del director general de Seguridad de prohibirme la continuación de mi viaje y de obligarme a regresar a Valencia.

Después de acreditar mi condición de Diputado, pregunté al agente si la orden era escrita, a lo que me contestó que sólo era verbal. Temeroso de que tamaña arbitrariedad pudiera proceder de las altas autoridades del Gobierno, exigí que se me trajera la orden escrita, a lo que el agente accedió, enviando un propio a Valencia.

Considerando que era humillante para un Diputado permanecer detenido en la carretera mientras se aclaraba la existencia o no de la orden, intenté continuar mi ruta, aunque fuese a marcha moderada; pero en vista de que la fuerza pública allí concentrada se oponía a mis deseos, decidí abandonar el coche, requiriendo a los agentes a que si tal era la orden que tenían, detuvieran también mi persona; no osaron hacerlo, y en vista de ello proseguí mi camino a pie hasta el próximo pueblo del Perelló, distante del puesto de control unos cuatro o cinco kilómetros, acompañado de varios Diputados y amigos y de los guardias de asalto del Perellonet.

La caravana recordaba seguramente a los campesinos que se asomaban curiosos a las puertas de sus casas para vernos pasar rodeados de fuerza pública como delincuentes vulgares, a las antiguas conducciones por carretera, entre parejas de la Guardia civil. La única diferencia estribaba en que ahora los guardias eran de Asalto y en que yo no iba todavía esposado. Pero a este paso, todo se andará.

Una vez en Perelló, y mientras descansábamos de la imprevista caminata, llegó la orden del director general de Seguridad, que, transcrita literalmente, dice así:

"El director general de Seguridad.—Por conveniencias del momento queda prohibida la salida de la jurisdicción de la capital de Valencia al Excmo. Sr. D. Francisco Largo Caballero; por lo que encargo a los agentes dependientes de mi autoridad que, con toda la consideración y respeto debido a su alta personalidad, le comuniquen esta

resolución.—Valencia, 23 de Octubre de 1937.—El director general, Carlos de Juan (rubricado).—Señor comisario jefe de la Brigada de Investigación criminal.—Hay un sello en tinta que dice: "Director general de Seguridad".

El portador era el comisario jefe de la Brigada de Investigación criminal. El dato puede ser fortuito, pero no hay duda de que la calidad del emisario estaba a tono con el aspecto de delinquentes comunes que nos daba el nutrido y marcial acompañamiento. Seguido de dicho comisario y con su venia me dirigí al vecino pueblo de Sueca, donde requerí a un notario para que diese fe de la orden del director general de Seguridad, ya que no conseguí que se me fuera entregada, sino sólo comunicada. Tengo a su disposición, señor Presidente, este testimonio notarial.

Devolví al comisario la orden escrita, firmándola como enterado. De regreso al Perelló, le dije al comisario de la Brigada de Investigación criminal que él había cumplido su deber comunicándome la orden según en ella se expresa; pero que no habiendo en la misma ningún mandato de ejecución, sino simplemente de comunicación, yo, bajo mi exclusiva responsabilidad y, a mi juicio, sin ningún detrimento para la suya, decidía continuar mi viaje hasta el parador de Ifach, donde me estaban esperando varios amigos, para almorzar, desde las dos de la tarde, y ya eran las tres y media y aún había que recorrer más de cien kilómetros.

El comisario pareció estar acorde con esta interpretación y con mi decisión de llegar al parador indicado; pero cuando ya habíamos andado unos minutos con dirección a Sueca, volvió a detenernos un guardia motorista y pocos instantes después llegaron el comisario, el agente del control y toda la escolta armada, diciéndome que habían vuelto a hablar por teléfono con el director general de Seguridad, que le habían expuesto mi propósito de ir a almorzar al Ifach, pero que el director general ordenaba terminantemente que se me hiciera regresar a Valencia y a mi domicilio. La detención arbitraria tenía un corolario inesperado: una orden de confinamiento.

Exigi otra vez que se me trajera por escrito la nueva orden. Esperé hasta las cinco de la tarde en la carretera del Perelló a Sueca. La orden escrita no llegó esta segunda vez. Entre tanto regresó de Valencia el Diputado D. Rodolfo Llopis que fué a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar conocimiento y protestar del atropello. Informado de las conversaciones telefónicas que el Sr. Llopis tuvo con V. E. y de la de V. E. con el Ministro de la Gobernación, según la cual éste contestó a las reclamaciones de V. E. diciéndole que no rectificaba la orden que me prohibía salir de Valencia, regresé a esta ciudad con la amargura que tan lamentable jornada dejó en mi pecho de español y de Diputado de la Nación. El Gobierno podía estar satisfecho: había ganado, a mi pobre costa, la que en la historia venidera se llamará la gran batalla de El Perelló. Posteriormente he recibido una comunicación del director general de Seguridad levantándome el confinamiento en que, por propio arbitrio, me había con-

denado sin más trámites. Con ello se confirma la arbitrariedad y las violaciones legales contenidas en las órdenes anteriores. Copiada a la letra, dice así: "Dirección general de Seguridad. Habiendo cesado las causas que motivaron la orden de esta Dirección general de fecha de ayer, relativa a la prohibición de que V. E. se ausentase de la jurisdicción de esta capital, me complazco en participarle que desde este momento queda sin efecto aquella disposición y que, por consiguiente, queda autorizado para realizar viajes por todo el territorio leal sin limitación alguna. Me permito rogar a V. E. firme el enterado del duplicado de esta resolución. Valencia, 24 de Octubre de 1937. El director general, Carlos de Juan. Excelentísimo Sr. D. Francisco Largo Caballero. (Hay un sello que dice: El director general de Seguridad.)" Ruego a V. E., Sr. Presidente, que ponga todo su celo y amor por la Justicia y por el Parlamento, bien probados, en la reparación de esta afrenta que como Diputado he sido objeto. Si se tratara de un simple incidente personal, de un agravio a mi exclusiva persona, nada diría ni nada haría, porque medio siglo de luchas políticas y sociales me han acostumbrado a todo linaje de injurias y persecuciones, y una más—así sea la más dolorosa y amarga, porque no viene, como otras, de los que siempre fueron mis enemigos de clase—, sino de los de mi propia estirpe social, de los de mi propio partido, de hombres a algunos de los cuales puedo decir que he visto nacer políticamente y crecer filialmente a mi sombra; una persecución más, decía, no turbará esta serenidad que sólo se logra en la cumbre de los años y de una larga y rica experiencia humana cuando, sin perder la fe en los destinos del pueblo y de la clase social a que uno pertenece, sino creyendo, al contrario, en ellos más que nunca, ya los desengaños individuales apenas afligen ni casi sorprenden. Los individuos pasamos con nuestras pequeñeces y miserias; sólo las colectidades quedan y hacen la Historia, casi siempre a pesar de nosotros los individuos. Pero no se trata de un caso personal. Piense V. E., Sr. Presidente, que nos contempla ese mundo circundante a quien un día y otro hemos venido diciendo que nuestro pueblo lucha a muerte por una República democrática, por una Constitución parlamentaria. ¿Y qué va a decir ese mundo cuando se entere de que los Diputados de la Nación no disponen de la más antigua y elemental de las libertades, la libertad que no se niega ni a los vagabundos, la libertad de circular libremente? ¿Cómo se va a juzgar dentro y fuera del país nuestra República, nuestra Constitución, nuestro Parlamento? Como guardián de los fueros de este último, Sr. Presidente, y en interés de toda la institución y no meramente en defensa de un solo Diputado, elevo a V. E. con todo respeto el relato de este atropello y le ruego que no ceje, con su proverbial diligencia, hasta que la injusticia cometida en mi persona contra todos los Diputados leales sea debidamente reparada. Viva V. E. muchos años. Valencia, 26 de Octubre de 1937.—Francisco L. Caballero.—Excmo. Sr. Presidente de las Cortes."

Documento número 5.

Hay un sello en seco que dice: "Ministerio de la Gobernación".

"Excmo. Sr.: Conozco, gracias a la difusión mecanográfica que se la ha dado—nuevo procedimiento puesto en curso para evitar que se ignoren manifestaciones de opinión que la censura no autoriza divulgar—, el documento que, suscrito por el Excmo. Sr. D. Francisco Largo Caballero, ha recibido V. E., como Presidente de las Cortes. El aspecto legal de la queja está tratado en mi respuesta a la comunicación de V. E., trasladándome la protesta producida, a nombre del excelentísimo Sr. D. Francisco Largo Caballero, por D. Rodolfo Llopis. No creo que proceda añadir nada nuevo a lo ya escrito; pero acaso no estorbe hacer notar el cuidadoso interés con que el Diputado que reclama su amparo, en términos sobradamente doloridos para que dejen de ser impresionantes, elude significarle las razones de la determinación de mi autoridad, que le eran perfectamente conocidas, porque recordando yo los deberes de compañerismo y ejercitándolos con el mayor placer, cuidé de que el Sr. Largo Caballero fuese personalmente avisado de que, suspendidos con carácter general los actos públicos, y habiendo los organizadores del suyo, desafiando la orden, convocado, a espaldas de la censura, una manifestación, contando con la presencia del señor Largo Caballero, procedía que, por su parte, renunciase al viaje a Alicante, que sólo podía tener un sentido perturbador, de alcances quizá dolorosos. El ruego producido a mi instancia no surtió efecto ninguno.

El Sr. Diputado que reclama su amparo con palabras dolidas sacó lo mejor de su orgullo para recusar nuestro ruego y dejar establecido, al día siguiente, su resuelto propósito de cooperar al acto organizado por sus amigos de Alicante, a las seis de la tarde del día 23 de Octubre. Declaró, Excmo. Sr., que no me sorprendió la cosa, aun cuando sí me entristeció. Se me impuso el deber de impedir que el Excmo. Sr. Largo Caballero cooperase con su presencia en Alicante a un posible trastorno público, y se impidió su viaje. El trato fué el que corresponde a un Diputado de la Nación, que, por añadidura, ha sido Presidente del Consejo de Ministros: correctísimo. Uo se le esposó, confiesa. Y, sin embargo, lo intentamos si bien mediante reiteradas llamadas a su sentido de la responsabilidad, que es la más segura cadena contra nuestras fugas del deber. Todo inútil. Hubo terquedad y notario, y también, por parte de algunos acompañantes de menos seso, invitaciones a la desobediencia a los agentes encargados de cumplir la orden. Recia debió ser la voluntad de realizar el propósito cuando medió tanto forcejeo.

Si cediese a la tentación de corresponder a la literatura con que el documento del Sr. Diputado que produce la queja ha sido adornado, podrían ser añadidos algunos matices para situar en su justo escenario la que no me niego a llamar "batalla del Perelló". No es chica batalla—y victo-

ria—la que consistió en dejar establecido que la ley está por encima de todos los caprichos personales, cualquiera que sea la individualidad que se extravíe en ello. Temo mucho, Excmo. Sr., que no se estremezca el mundo, al que los gritos de dolor que por esos días partían de Asturias no sacaran de su letargo, cuando conozca, si conoce, que en El Perelló hubo que recordar a personas conspicuas, que ejercieron altas autoridades estatales en nuestra República, que la ley se escribe para todos los ciudadanos. El mundo, excelentísimo señor, es de una tal indiferencia, que es casi seguro que se niegue a registrar entre sus momentos estelares lo sucedido en 23 de Octubre en las cercanías de Valencia, y, sin embargo, gracias a eso no ocurrió algo peor en Alicante.

Valencia, 30 de Octubre de 1937.—J. Zugazagoitia.—Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados."

El Sr. **PRESIDENTE**: Hasta aquí, todos los documentos producidos con motivo del incidente a que ha dado lugar la queja del Sr. Largo Caballero.

Hube de abstenerme de hacer ninguna otra gestión cerca del Gobierno, por dos razones: una, porque la situación de hecho en que el Sr. Largo Caballero se encontró el día 23 de Octubre había desaparecido, y otra, porque, convocada ya la reunión de la Diputación Permanente, estimé que a ella correspondía conocer del asunto en toda su amplitud y tomar las resoluciones que considere oportunas en cuanto a la defensa del derecho parlamentario.

Repito que el debate que se va a entablar ha de versar sobre dos aspectos: primero, sobre el hecho en sí y sobre el concepto y juicio que merece a la Diputación Permanente, que representa la totalidad del Parlamento cuando éste se halla en vacación, lo pasado, y segundo, respecto de si la conducta del Presidente se ha ajustado a lo que es su obligación, a la defensa del fuero parlamentario.

Se abre discusión.

El Sr. **VELAO**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **VELAO**: Para pronunciar, ajustándome a la norma trazada por el Sr. Presidente, muy pocas palabras.

El hecho de haberse dado lectura en la Diputación Permanente a los documentos que se nos acaban de mostrar y las palabras del Sr. Presidente en relación con su actitud una vez producido el hecho, me llevan a sentar, en primer lugar, la afirmación de nuestro voto en favor de la toma en consideración del asunto, sin entrar en este momento en el fondo del mismo. En segundo término, he de hacer constar que, a nuestro juicio, la conducta del Sr. Presidente de la Cámara se ha ajustado, en todo momento, a los que son sus deberes parlamentarios y constitucionales. Finalmente, con las manifestaciones hechas ante la Diputación Permanente ha cumplido el último deber, toda vez que el hecho, como ha dicho muy bien, había dejado de producirse.

Como he dicho antes, no entro en el fondo de la cuestión porque el Sr. Presidente ha planteado

con mucha claridad que el asunto que aquí se discute es la toma o no en consideración de la cuestión que a nuestra resolución se somete; y, en este sentido, nosotros votamos por la toma en consideración para la discusión del fondo del asunto. Y nada más.

El Sr. **PRESIDENTE**: ¿Algún otro Sr. Diputado desea hacer uso de la palabra? **(Pausa.)** ¿Se toma en consideración que sea discutida la protesta presentada por el Sr. Largo Caballero? **(Asentimiento.)** Se toma en consideración; ábrese, pues, discusión.

El Sr. **VELAO**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **VELAO**: Para seguir ajustándome a la norma trazada por el Sr. Presidente, voy a pronunciar muy pocas palabras, y como se trata de algo que obedece a una convicción firmísima en cosa perfectamente clara, no es preciso que me extienda en largas consideraciones.

Como en uno de los documentos aquí leídos el Sr. Ministro de la Gobernación dice muy bien, para el día 24 de Octubre pasado había convocado otros actos de distinto carácter en España: tres de ellos, efectivamente, del Frente Popular y otro del Comité de Enlace de la U. G. T. y otras organizaciones; todos ellos fueron suspendidos por el Gobierno y la orden acatada por las distintas organizaciones que a celebrar esos actos estaban comprometidas.

Es, a nuestro juicio, una idea firme la de que la inmunidad parlamentaria del Diputado no lleva a tanto como a desobedecer las órdenes del Gobierno; bien claro dice uno de los artículos de la Constitución que se refieren a la inmunidad de los Sres. Diputados, que éstos son inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo; fuera de esto, todo Diputado está obligado, como todo ciudadano, a cumplir las órdenes del Gobierno. En este sentido, todas las organizaciones a las que se les había encomendado celebrar actos aquel día obedecieron esta orden. Yo no voy a decir—hablo sin reserva ninguna, en absoluto—que nuestro compañero de Diputación Sr. Largo Caballero está más obligado que nadie a cumplir las órdenes del Gobierno, y no lo digo porque no lo creo así, ya que estimo que todos estamos igualmente obligados; lo que sí tengo que manifestar es que cualquier Diputado—y el Sr. Largo Caballero está entre ellos—se halla obligado a cumplir las órdenes del Gobierno.

Por otra parte, las determinaciones tomadas por el Gobierno para impedir la celebración de lo que no había de ser un mitin, en Alicante, pero que, a juicio suyo, en todo momento—y no entro a analizar los motivos que tuviera, me basta con que lo haya juzgado así el Gobierno—sí había de ser un acto, una manifestación pública; esas determinaciones, digo, del Gobierno, cuyas órdenes fueron llevadas a cabo por los agentes de la autoridad, no lesionan en absoluto el derecho del Diputado; y en esto voy a apoyarme principalmente para creer que el derecho constitucional del Diputado no ha sufrido lesión en el presente caso.

Dícese en uno de los escritos del Sr. Largo Caballero que se le ha coartado la libertad que

se concede a todo ciudadano de circular libremente por el territorio nacional: ello, a mi entender, es una gran equivocación, porque esa misma libertad puede ser coartada por el Gobierno, en cualquier instante, cuando así convenga a la salud de la República. A juicio del Gobierno—y repito que no voy a examinar los motivos que en este caso haya habido—se había presentado la necesidad de coartar a un ciudadano la libertad de circular libremente por el territorio en determinado momento, y, por consiguiente, Diputado o no, estaba a las órdenes del Gobierno y en la necesidad absoluta de cumplirlas.

Nosotros, como conclusión a estas palabras, decimos lo siguiente: el Gobierno, estimando que se iba a realizar un acto público que no convenía a los intereses de la República, tomó sus medidas, entre ellas la de que el Sr. Largo Caballero no se personase en Alicante; y esta medida, a nosotros, nos parece bien. No se ha lesionado el derecho del Diputado: el Sr. Largo Caballero podrá ir a Alicante y, cuando los motivos han cesado, el Sr. Largo Caballero ha adquirido la libertad de circular libremente por el territorio, como he podido ver, en el término de unas horas. Por tanto, nuestra opinión es que el Gobierno ha cumplido su deber, a cuyo deber estamos obligados todos los ciudadanos españoles.

El Sr. **ARAQUISTAIN**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **ARAQUISTAIN**: Yo quisiera hacer algunas aclaraciones respecto a los escritos del señor Ministro de la Gobernación y a lo que acaba de decir el Sr. Velao.

Desde luego, uno de los fundamentos en que se apoyan el Sr. Ministro de la Gobernación y el director de Seguridad es que el periódico "Avance", de Alicante, publicó, sin pasarlo por la censura, un suelto en que se invitaba al pueblo, al proletariado de aquella capital, a que saliera a recibir al Sr. Largo Caballero. Esto es cierto; pero el hecho es que en Alicante, durante tres días, no hubo censura porque el censor estaba enfermo y no había con quién reemplazarle; de modo que ningún periódico fué censurado entonces. Por tanto, no se puede inculpar a los que publicaron el suelto de referencia.

Además, el Sr. Largo Caballero no tenía noticia de la invitación hecha; simplemente, él quería, como dice el Sr. Ministro de la Gobernación, saludar a sus amigos; había renunciado a la conferencia, al mitin. ¿De cuándo acá se puede impedir a un Diputado que salude a sus amigos? Creo que esto es una violación manifiesta del derecho que tiene el Diputado a saludar a sus amigos e ir adonde quiera, porque el Diputado, como tal, tiene derechos y deberes que cumplir; entre los derechos, el de visitar a sus amigos cuando lo desee, con fines políticos, incluso con fines de guerra; y entre los deberes, el de fiscalizar la obra del Gobierno. Por tanto, a mi juicio, ha habido violación flagrante del derecho del Diputado.

En los documentos del Sr. Ministro de la Gobernación se habla de que fué tratado con toda consideración el Sr. Largo Caballero. Esto es cier-

to en general; pero debo añadir un dato que no consta en el documento del Sr. Llopis, ni en la carta del Sr. Largo Caballero, y es el de que estando en la carretera, cuando hubimos de entrar en los coches, porque hacía mucho frío, uno de los agentes, uno de los guardias, por creer, sin duda, que el coche iba a arrancar, cargó el fusil esto no consta ahí, repito, mas es verdad. De modo que respecto a la consideración, deja bastante que desear. En suma, me parece que es una violación del derecho del Diputado, porque al Diputado no se le puede prohibir que vaya donde quiera. ¿Que iba a haber perturbaciones en Alicante? No lo creo; sobre todo, los señores del Gobierno, que conocen un poco la psicología del pueblo, saben lo que iba a pasar: se iban a reunir unos cuantos hombres, unos cientos; iban a dar unos vivas, probablemente, y luego, a cenar y a acostarse. El motivo era otro. Creo que más bien fué un exceso de alarma de las autoridades de Alicante, fundándose principalmente en ese hecho de que el suelto del periódico "Avance" no había ido a la censura. Probablemente fué, pero como no había censor, repito, no fué censurado; no es, pues, culpa que se pueda imputar al periódico. Por consiguiente, creo que es ésta una cuestión que la Diputación Permanente debe tener muy en cuenta, no ya en este caso concreto, sino en general. Si los Diputados tienen o no derecho a circular libremente, a ir a todas partes, a ir incluso a los frentes a ver cómo van las operaciones de guerra, se debe meditar por quien corresponda en este caso concreto para establecer normas generales a este respecto.

El Sr. **LAMONEDA**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **LAMONEDA**: La representación del grupo parlamentario socialista suscribe las manifestaciones hechas por el Sr. Velao, si bien ha de hacer algunas por su cuenta. La primera, lamentar que este incidente se haya producido precisamente en la persona de uno de los miembros del grupo socialista, persona que ha desempeñado, con la confianza de éste, la Presidencia del Consejo de Ministros y la cartera de Guerra.

Ni en la intención ni en los hechos que al parecer se imputan al Gobierno vemos nosotros ninguna ofensa a la investidura parlamentaria; precisamente nos hallamos en el momento en que gobierna un Gabinete que ha logrado normalizar aquellas garantías que los parlamentarios han tenido tradicionalmente para el ejercicio de su cargo dentro de los fueros del Parlamento; porque todos hemos vivido momentos muy amargos en que el carnet de Diputado no ha sido suficiente para pasar un control, para visitar un frente o para trasladarse de una población a otra, incluso cuando se hacía por acuerdo del propio Gobierno, y a ninguno se nos ha ocurrido—porque nos hacíamos cargo de la situación—, aun dentro de la modestia de ser simples Diputados a Cortes, formular protestas contra el Gobierno porque eran agentes suyos, bien de tipo gubernativo o de tipo militar, los que inferían esos agravios o supuestos agravios a nuestra investidura. Hoy nos encontramos con que el Diputado puede hacer uso plenamente de todas sus prerrogativas. Si hubiese que

enjuiciar esto con prejuicio, no tendría éste fundamento, referido al Gobierno actual, que ha logrado esto.

En el caso de nuestro camarada Largo Caballero es evidente—lo deducimos, no sólo de nuestros informes de partido, sino de la documentación que se ha leído—que había el propósito de sustituir los mítines suspendidos por unas reuniones políticas más reducidas, más limitadas, o por unas manifestaciones públicas de adhesión a una determinada persona o a una determinada posición política.

Nada dice, para enjuiciar el caso, que el periódico "Avance" pasase o no por la censura; hay que juzgar de las palabras que contiene su primera plana con gran lujo de titulares; primero, subrayar que el Gobierno prohibía mítines para que no se celebrase la conferencia de Largo Caballero en Alicante; subrayar más aún la frase de que el Gobierno no tenía otra misión y otra preocupación que impedir que determinado Diputado se dirigiese desde una de las tribunas del país, y, más que nada, la invitación a los trabajadores para que a una hora determinada pasasen por un amplio local de Alicante, donde este camarada nuestro había de recibirles y había (digámoslo, como es natural) de dirigirles algunas palabras, con lo cual la finalidad del acto se lograba burlando así al Gobierno y dejándole en una situación muy poco airosa. Pero, además de deducir esto de ese periódico y de los textos aquí leídos, nosotros tenemos la información de que en gran parte de los pueblos del trayecto había preparadas Comisiones con banderas y distintivos dispuestas a hacer, desde Valencia a Alicante, y al día siguiente en los pueblos citados de Elche y otros, una manifestación mucho más extensa de lo que era el primitivo propósito de Largo Caballero. El Gobierno tenía que velar por su prestigio, tenía que velar por el orden público, mucho más en momentos en que se había producido el derrumbamiento de nuestro frente.

Con más delicadeza que procedió el Ministro de la Gobernación no creemos que se pueda proceder. El Ministro de la Gobernación pensó que, salvo dejar el prestigio del Poder público en medio de la calle, él había de evitar que estos propósitos (de los que había unos indicios, que acabo de exponer, bien claros y terminantes) se realizasen, y no por un acto de fuerza producido en Alicante cuando ya estuviese allí Largo Caballero y cuando los obreros hubieran acudido al sitio que se les decía, sino antes de llegar a él. Hizo una gestión amistosa, una gestión oficiosa que el Ministro encargó al director general de Seguridad; nuestro camarada debió atender esa indicación; al no atenderla, era evidente que existía el plan de realizar el acto, y el Ministro de la Gobernación lo evitó de la manera más correcta posible, y si en esa manera no hubo la corrección absoluta que deseaba no fué por carecer él de buena voluntad, sino por no existir esa buena voluntad en la otra parte que intervenía en el asunto.

Nosotros creemos que las prerrogativas de los parlamentarios no están en peligro con la inter-

vención de este Gobierno, están respetadas; nosotros creemos, además, que un parlamentario del bloque que sostiene a este Gobierno y que ha agotado con amplitud desusada hasta ahora en este período, desde que existe el Frente Popular, su confianza para que el Gobierno realice la política de guerra que las circunstancias demanden, incurre por lo menos en un delito político cuando desatiende las indicaciones del Gobierno, sin entrar ahora, con el texto de la Constitución en la mano, en si incurre también en un delito de desacato.

La representación socialista, consecuente con su acuerdo unánime de apoyo incondicional al Gobierno, no tiene más remedio que decir, añadiéndole mucho, que en este caso el Gobierno ha cumplido con su deber y que a nosotros corresponde decir a todos los parlamentarios, sean quienes sean—si son de más relieve con más motivo—que cumplan también con el suyo. Nada más.

El Sr. **PRESIDENTE**: La Sra. Ibárruri tiene la palabra.

La Sra. **IBARRURI**: Pocas palabras, porque ya los Diputados Sres. Velao y Lamonedá han reflejado lo que nosotros pensábamos a este respecto. Nosotros creemos, en primer lugar, que el señor Presidente de las Cortes ha cumplido con su deber, saliendo en defensa de un Diputado que creía atropellado sus derechos; pero nosotros pensamos que este Diputado que cree atropellados sus derechos porque el Gobierno, en un momento determinado, impone restricciones a cualquier ciudadano, llámese como se llame, no tiene razón para quejarse; nosotros pensamos que las prerrogativas parlamentarias no quieren decir que, en cualquier momento, cualquier Diputado—porque, continuando por esta trayectoria, llegaríamos a la conclusión de que los Diputados enemigos de la República podían hacer también, en nombre de estas prerrogativas, lo que a ellos les pareciera—; nosotros pensamos que el Gobierno cumplió con su deber cuando las circunstancias en que se desenvolvía nuestro pueblo impedían que se celebrasen ciertos actos de carácter público que podían promover desórdenes, que podían servir para crear un estado de opinión o una situación no muy grata en momentos tan graves como los que vivimos en nuestro país.

Por otro lado, quiero también afirmar, como ha afirmado el camarada Lamonedá, y en contra de lo que ha afirmado el camarada Araquistáin, que de ninguna manera se puede creer que un Diputado, por el hecho de serlo, puede circular por todo el territorio nacional e incluso por la zona de guerra, porque aquí también llegaríamos al resultado de que los enemigos de la República, parándose en el fuero parlamentario, podrían circular por todos nuestros frentes, si es que ello fuera posible, y poner en conocimiento del enemigo cuál es la situación de nuestras fuerzas y cuál es la situación de nuestro Ejército. Porque yo, sí, compañero Araquistáin; yo, que soy Diputado también, he prodigado más que nadie, quizá, mis visitas al frente, y me he encontrado

en momentos determinados con que un simple soldado me ha dicho: "Se prohíbe ir por ese camino", y no he invocado jamás mi condición de parlamentario, sino que he pensado que, cuando el Estado Mayor o cuando los jefes del Ejército prohibían circular por aquel territorio, había que atenerse a las órdenes de aquel simple miliciano, y no he querido invocar jamás, como digo, mi condición de Diputado para ir por lugares por donde no podía ir. No creo que la prerrogativa ni el fuero parlamentario hayan sufrido ningún quebranto ni desdoro por el hecho de que un Diputado no pudiera ir por alguna parte, y creo que el Sr. Presidente ha cumplido con su deber al defender aquellos derechos que se creían atropellados.

El Sr. **PRESIDENTE**: ¿Algún otro Sr. Diputado quiere hacer uso de la palabra?

El Sr. **PASCUAL LEONE**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: El Sr. Pascual Leone tiene la palabra.

El Sr. **PASCUAL LEONE**: El relato de los hechos es evidente, no sólo por los documentos que acaba de leer el Sr. Secretario, sino por el propio desarrollo de la discusión, estando expuesto por los Sres. Velao, Lamonedá y Araquistáin lo fundamental, y no cabe insistir.

En cuanto a la actitud del Sr. Presidente, creo que ha reflejado la unanimidad del criterio o, por lo menos, el de la casi totalidad de la Diputación, por la reiteración con que se ha hecho el reconocimiento de que ha cumplido su misión; mucho más, desde el momento en que el Sr. Presidente de las Cortes trae a su órgano jurisdiccional típico la cuestión, una vez zanjado lo apremiante del conflicto para su oportuna calificación; porque la interpretación de nuestros derechos, que hallan su conciencia en el deber, ha de darla un órgano jurisdiccional, si no al texto constitucional, como el de cualquier ley, desarraigado de las circunstancias, sin tener en cuenta, no solamente los hechos, sino el momento en que los hechos se producen, sin apreciar y calibrar esto, nos encontraríamos con que le daríamos una interpretación expresiva rígida, que pudiera ser abuso del propio texto. No hemos de olvidar que estamos en guerra, y estando en guerra, como en cualquier circunstancia anormal, el fuero del parlamentario tiene las mismas limitaciones que el fuero individual, porque todo fuero, como toda posesión de su derecho, tiene un modo conceptual de apreciarlo, que es el del servicio que alienta y justifica. Se otorga el fuero parlamentario para servir a la institución parlamentaria. Por eso, cuando viene a la Diputación Permanente el pleito, es ésta la que debe apreciar, no en abstracto—y creo que ésta es la lección que debemos sacar de este pleito—, sino en concreto y atendidas las circunstancias actuales, cuál es el alcance que nosotros los Diputados, no el Gobierno, hemos de darle a nuestro fuero, que no es privilegio.

Y actualmente, en servicio del país y de la causa que representamos, nosotros, más que nunca, debemos decir que no somos unos ciudadanos de excepcional categoría, que hemos de estar al servicio de la ley y limitados por ella, y al servicio de todos los órganos jurisdiccionales. ¡Ah!, no

excluye eso la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales se extralimiten en su función y abusen de la ley. El primer deber es el de la obediencia; el segundo, recurrir al órgano jurisdiccional en queja, en querella, para que la ley se restablezca, para que la justicia se haga. Pero el primer momento no es de vacilación: la orden se cumple y después, inmediatamente después, se produce la querella.

Dicho esto, creo que la conclusión es obvia. Estamos en el momento en que la Diputación Permanente debe declarar que el fuero parlamentario tiene para nosotros este alcance: el de que nosotros tenemos derecho a todo, dentro del marco de las leyes, teniendo conciencia de que ese derecho ha de ser en servicio de una causa, que es la de España. Si la Diputación Permanente, como las Cortes, estimaran en un momento determinado, modificable por las circunstancias, ampliable o restringible nuestro fuero, seríamos nosotros, y no un órgano extraño, quienes le dieran la interpretación valedera.

El Sr. **JAUREGUI**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **JAUREGUI**: Pocas palabras, en nombre de la minoría vasca, que desea exponer también su opinión en este asunto.

Tenemos que manifestar, sin asomo alguno de duda, que la conducta del Gobierno en este incidente del que se nos ha dado cuenta es plenamente correcta: ha ejercido un derecho, y estimamos que no sólo debemos aprobar aquella conducta, por ser, como digo, correcta en su totalidad, sino que, con esa aprobación, defendemos el fuero parlamentario.

El fuero parlamentario es un privilegio, unas facultades que tienen los Sres. Diputados para ejercitar derechos y para cumplir determinados deberes; pero no puede constituir nunca una licencia especial para delinquir, para infringir aquellas leyes o disposiciones dadas por el Gobierno en ejercicio de su autoridad; no podemos prostituir el fuero parlamentario. El Gobierno, con una medida muy acertada, prohibió la realización de determinados actos, y estimamos que esta facultad de prohibir lleva consigo la de tomar aquellas medidas conducentes a hacerla efectiva y que, por consiguiente, la retención de un señor Diputado a quien se le impide la consumación de un acto de aquella naturaleza, no es sino una consecuencia de la prohibición dictada; no es una violación del derecho de un Diputado. En aquellos momentos se estableció una zona dentro de la cual no podían organizarse determinados actos políticos y, por tanto, el Poder público tenía el derecho de adoptar medidas precautorias para que tales actos no tuvieran lugar, y esas medidas se han empleado, tanto por lo que toca al director general de Seguridad como al Ministro de la Gobernación, con la corrección y la delicadeza, por decirlo así, a que es acreedora la personalidad del Sr. Largo Caballero.

Por consiguiente, nosotros aprobamos la conducta del Gobierno y estimamos también correcta la actitud del Sr. Presidente de la Cámara, que

ante una denuncia formulada por un Sr. Diputado se dirige al Gobierno, ajustándose al marco de las leyes.

El Sr. **COROMINAS**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **COROMINAS**: Ante todo, deseo hacer constar, como lo he manifestado diferentes veces, mi simpatía personal por este hombre que ha arrostrado tantos peligros y que ha sostenido tantas luchas por la libertad y por la causa; pero no nos hemos de dejar llevar aquí por la voz del sentimiento, sino por la responsabilidad que trae aparejada la grave situación en que nos encontramos.

Nosotros vamos a proponer que no se tome aquí otro acuerdo ni se someta a votación otra cosa que la aprobación de la conducta del señor Presidente de la Cámara, porque esto es lo que nos interesa a todos. Y porque esto envuelve también la solución más lógica del conflicto que aquí se ha planteado, entiendo que en este caso no podemos ni aprobar ni desaprobamos la conducta del Gobierno, pues no es nuestra misión en estos instantes; creo que no hemos de aprobar ni desaprobamos la conducta del Sr. Largo Caballero porque tampoco hemos de entrar en este asunto; lo que nosotros hemos de decir aquí es si el fuero de la Cámara y el de los Diputados han sido o no bien defendidos por el Sr. Presidente. Pero hecha esta manifestación, como no nos duelen prendas y nuestro juego ha de ser en todo momento limpio, hemos de decir que si aquí se somete a votación algo de lo que pueda resultar una censura para el Gobierno, nosotros no prestaremos nuestro apoyo, sino que nos pronunciaremos en contra. Nosotros, ni directa ni indirectamente podremos asociarnos a ningún acto que en estos instantes pudiese debilitar la fuerza moral que representa el voto de confianza que hemos dado hace días en sesión pública al Gobierno que ahora rige los destinos de España.

En cuanto al hecho en sí, tampoco nos duelen prendas: nos hacemos cargo de que el señor Ministro de la Gobernación se ha encontrado en un momento de contradicción entre dos cosas que exigían una actuación suya: por una parte, se encontraba con que había que ejercer violencia sobre la persona de un Diputado, tanto que podía rozar los prestigios de la inviolabilidad parlamentaria; por otra parte, tenía la obligación de velar por que no se diese en Alicante un espectáculo desagradable, muy perjudicial para todo el Frente Popular. Porque el Sr. Araquistáin dice: "¿Qué habría pasado? ¿A qué vienen esas alarmas? Habría habido allí alguna manifestación, algunos vivas, se habría acompañado al Diputado a su casa, y nada más." Pero, Sr. Araquistáin, eso en todas partes es una manifestación pública, y si el Gobierno ha dado orden de impedir a todos los grupos la celebración de actos públicos, tampoco ése podría verificarse, sea cual fuese la naturaleza e importancia... (El Sr. Araquistáin: Permítame S. S. una interrupción. Se habían prohibido los mítines.) Es peor la manifestación; en todas partes se ha entendido que las manifestaciones públicas eran algo más grave y más in-

interesante para la moral del pueblo que una manifestación en local cerrado; pero, en fin, el señor Araquistáin tiene derecho a interpretar esas cosas en el sentido que estime oportuno, y yo también le tengo.

Nosotros somos partidarios de llevar hasta el máximo el respeto a la inviolabilidad parlamentaria; creemos que en ningún caso el Gobierno ha de poner obstáculos al ejercicio de estos derechos parlamentarios a la ligera; pero cuando un conflicto de orden público pueda exigirlo, el Gobierno tiene, no solamente el derecho, sino el deber de impedir que un Diputado pueda desobedecer las órdenes dadas, que lo han sido para todos.

Nosotros expresamos claramente cuál es nuestra posición. Creemos, primero, que aquí no ha de tomarse otro acuerdo que deliberar y resolver respecto a la actitud del Sr. Presidente de la Cámara, que entendemos ha sido la que debía ser, en defensa del fuero parlamentario; y decimos, en segundo lugar, que si se ha de verificar una votación de la cual pueda resultar censura para el Gobierno, no podemos adherirnos a esta censura, a pesar de que, personalmente, sentimos la mayor devoción y respeto a la persona de nuestro compañero en las Cortes Sr. Largo Caballero.

El Sr. **PRESIDENTE**: Voy a recoger las distintas manifestaciones hechas por los Sres. Diputados, presentando a su aprobación este Orden del día.

Escuchados por la Comisión Permanente los Sres. Diputados que han hecho uso de la palabra, considero liquidado el incidente promovido por los escritos de los Sres. Llopis y Largo Caballero con las comunicaciones cruzadas entre la Cámara y el Sr. Ministro de la Gobernación y aprobar la conducta seguida por el Presidente de la Cámara. **(Pausa.)** ¿Se aprueba? **(Asentimiento.)** Queda aprobada.

Unas palabras del Sr. Araquistáin me mueven, en previsión de posibles dificultades y rozamientos entre algún Sr. Diputado y el Poder ejecutivo, a someter a la consideración de la Diputación Permanente un caso, que seguramente ha de presentarse y sobre el cual convendría que la propia Diputación Permanente tuviera ya fijado criterio, y es el del derecho de los Sres. Diputados a visitar los frentes de guerra. Yo creo—y ya en otra ocasión lo manifesté así—que ese derecho es legítimo en los Sres. Diputados, pero limitado por las disposiciones que el Poder público y la autoridad militar, en su representación, quieran establecer. Sólo en un caso ese derecho no queda limitado ni por el Poder público ni por autoridad de ninguna clase, y es aquél en que el Parlamento nombre, oficialmente, de su seno, una Comisión fiscalizadora de guerra, que, en representación del propio Parlamento, vaya a los frentes que estime convenientes. En ese momento, sí. En ese momento, el Poder público, sometido a nuestra fiscalización, está en el deber de allanarse a cualquier inspección que el Parlamento quiera realizar; pero, cuando la función la ejerce individual, particularmente, cualquier Sr. Diputado, por su libre arbitrio, éste a su vez se halla obligado a subordinarse a las disposiciones del Poder ejecutivo.

Dejo constancia de esta doctrina, que, si a la Diputación Permanente le parece acertada y clara, puede quedar ya como precedente para el futuro, con objeto de que evitemos cualquier rozamiento posible entre Sres. Diputados y el Gobierno. ¿Lo estima la Diputación así?

El Sr. **SANTALO**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **SANTALÓ**: A mí me parece bien. Sin embargo, he de objetar que puede ser un peligro el hecho de que determinadas autoridades, interpretando estas manifestaciones de modo extensivo, consideren como de guerra zonas no consideradas así ni por acuerdo de Gobierno, ni por la autoridad militar, sino por delegados de autoridades de orden público, que, a veces, se arrojan la facultad de señalar como de guerra zonas en las que, por el momento, no hay lucha de ninguna clase. He de suponer que estas medidas se toman, naturalmente, para evitar indiscreciones por parte de gentes que no tienen la responsabilidad de los representantes del país.

En efecto, en otra ocasión se trató de este asunto, y yo insisto en las mismas manifestaciones de entonces; es decir, que un representante en Cortes, precisamente para el cumplimiento de su deber y por razón de su responsabilidad, no puede estar al simple capricho de un agente de Policía ni siquiera de un delegado de Orden público, como éste no manifieste por escrito que se trata de un acuerdo del Gobierno al decretar como zona de guerra o zona que no se puede visitar una parte del territorio leal.

El Sr. **PRESIDENTE**: No he puesto de manifiesto, con las palabras expresadas, ninguna doctrina que no tenga ya su precedente en la historia de otros países.

Cuando la Gran Guerra de 1914 hubo de producir, dentro de cada Estado de los que tomaron parte en ella, una alteración de la normalidad, los Poderes públicos de esos países reglaron la función parlamentaria en ese sentido; la función parlamentaria no tiene límites en su fiscalización cuando responde a un acuerdo del propio Parlamento, y tiene, en la fiscalización de cada uno de los Diputados, el límite que marca el Poder ejecutivo cuando la iniciativa responde a un acto individual, voluntario, del propio Sr. Diputado; es decir, si un Diputado estima que ha llegado la hora de fiscalizar las operaciones militares y los actos del Poder público en los frentes, el camino tiene expedito para acudir a la Diputación Permanente o al Parlamento solicitando nombre una Comisión que se traslade al lugar o lugares que estimen oportuno para ejercer esa función fiscalizadora. Si él, en cumplimiento de su deber individual, cree que debe realizar una misión de fiscalización, tiene que subordinarse a las disposiciones que el Poder ejecutivo haya acordado, porque se daría el contrasentido, si tal no se hiciera, de que la voluntad de un Sr. Diputado, no puesto de acuerdo con la mayoría de los de la Cámara, fuera superior a la del propio Poder ejecutivo.

Lo que dice el Sr. Santaló es cosa distinta: si los Sres. Diputados se han de atener o no a las resoluciones o mandatos que den autoridades sub-

alternas; yo digo que no: los Diputados tienen el derecho a dirigirse en cada momento a la representación más alta del Poder ejecutivo, y cuando una orden se refiera a ellos, pedir que les sea comunicada. Lo que yo he planteado es que de antemano se estime que los Sres. Diputados están obligados a someterse a las disposiciones del Poder ejecutivo en todo lo que se refiera a inspección de los frentes de batalla, y que sólo en el caso de que el Parlamento o el órgano adecuado, es decir, su reunión plenaria o la de la Diputación Permanente, crean que se debe nombrar una Comisión oficial que investigue lo que ocurre en los frentes de batalla, es cuando ese derecho de investigación se realiza plenamente, sin limitación ninguna por parte del Poder ejecutivo, incluso por encima del Poder ejecutivo, porque entonces se trataría precisamente, si llegara el caso, de conocer si los actos realizados por el Poder ejecutivo

se acomodaban o no a lo que el Parlamento, que en definitiva es el que niega o da la confianza a los Gobiernos, estimaba conveniente y necesario en el momento en que esa fiscalización se produjera. ¿Se acuerda así? (Pausa.) Queda acordado.

El Sr. VARGAS: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. VARGAS: Para manifestar, en nombre del Sr. Palomo, que éste excusa su asistencia a esta sesión y se adhiere a los acuerdos de la mayoría.

El Sr. PRESIDENTE: Así constará.

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión."

Era la una y cuarenta y cinco minutos.

Rivadeneira, S. A. (Intervenido por el Estado).
Paseo de San Vicente, 28.—Madrid.